

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Rad: 11001-31-100-30-2022-00223-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por el ciudadano **JHON EDISSON OSPINA AGUDELO** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.523.306 contra la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**.

**ANTECEDENTES**

El ciudadano **JHON EDISSON OSPINA AGUDELO** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.523.306 , a nombre propio inicia acción de tutela contra la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** por considerar que se le están vulnerando los derechos fundamentales de **PETICIÓN** y de **IGUALDAD**.

**HECHOS Y PRETENSIONES**

Refiere el accionante que interpuso derecho de petición el 08 de marzo de 2022, solicitando atención humanitaria, una nueva valoración del PAARI y medición de carencias para que se continúe otorgando la atención humanitaria, dada cada tres meses siempre que se siga en estado de vulnerabilidad; y hasta la fecha cumple con los requisitos.

Que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no contesta el derecho de petición ni de forma ni de fondo, evadiendo su responsabilidad y expidiendo una resolución por la que se manifiesta que su estado de vulnerabilidad ha sido superado.

Refiere que, a la fecha está en un estado de necesidad y no se encuentra inmerso en ninguna de las causales para la suspensión de su ayuda humanitaria, además, los estudios realizados por la accionada son ineficaces para determinar su extrema vulnerabilidad pues no se ha realizado una visita domiciliaria mediante la cual se constate y verifique y no a través del PAARI cuyo resultado es contrario a la realidad. Señala que no cuenta con un proyecto productible sostenible que pueda generar sus propios ingresos y no cuenta con una vivienda digna.

Dice que, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas al no contestar el derecho de petición de fondo no solo viola el derecho de petición sino que vulnera el derecho al mínimo vital, igualdad.



En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos fundamentales de **PETICIÓN** e **IGUALDAD**; y se ordene a la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS** contestar el derecho de petición de forma y de fondo manifestando una fecha cierta de cuándo se va a conceder la ayuda, se asigne su mínimo vital con ayuda humanitaria de manera inmediata, se realice nueva valoración del PAARI y medición de carencias; además se realice el estudio de vulneración y mínimo vital por omisión de valoración de la situación real del desplazado y por desconocimiento de los procedimientos establecidos por el accionado en el manual de operación de rutas para identificación de carencias.

### **PRUEBAS**

La parte accionante anexa con el escrito tutelar, los siguientes documentos:  
-Derecho de petición dirigido a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con radicado No. 20227114858582 del 08/03/2022.

### **ACTUACIÓN PROCESAL**

1.- Admitida la tutela el 19 de abril de 2022, se ordenó la notificación a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.-El 20 de abril de 2022, se notificó a través del correo institucional del Juzgado **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- Dentro del término legal conferido allegó contestación a la acción de tutela la accionada **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**.

### **CONTESTACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.**

La accionada refirió: "(...) Esta Unidad para las víctimas dio respuesta al derecho de petición mediante la comunicación con radicado No. 20227206390191".

### **CONSIDERACIONES**

#### **Aspectos preliminares**

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

#### **Naturaleza jurídica de la acción de tutela**



La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

#### **Procedencia de la acción de tutela.**

El ciudadano **JHON EDISSON OSPINA AGUDELO** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.523.306 se encuentra legitimado por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales de **PETICIÓN** e **IGUALDAD** en virtud de lo dispuesto en el art. 86 de la Constitución Política de Colombia. *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, es una entidad del orden nacional con autonomía administrativa y patrimonial perteneciente al sector de la Inclusión social y la reconciliación, liderado por Prosperidad Social, además, es el ente a quien se endilga el actuar vulnerador de los derechos invocados por el accionante.

#### **Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.**

##### **Derecho Fundamental de Petición**

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:



“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).

## DEL CASO EN CONCRETO

Corresponde a esta Juzgadora determinar si en la presente acción constitucional la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** se encuentran vulnerando los derechos fundamentales de **PETICIÓN** e **IGUALDAD** al no contestar de forma y de fondo el derecho de petición elevado por el ciudadano **JHON EDISSON OSPINA AGUDELO** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.523.306, el día 08/03/2022, bajo el radicado 20227114858582.

Dentro de la documental aportada, se advierte derecho de petición elevado por el accionante ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del que se lee: “(...) 1. Solicito se realicen un nuevo PAARI medición de carencias y se realice una nueva valoración para determinar el estado de las carencias y de vulnerabilidad y como consecuencia de ello conceder la atención humanitaria. 2. Solicito se conceda la atención humanitaria prioritaria o se estudie la posibilidad de conceder la atención humanitaria. En caso de asignárseme un turno, se manifieste por escrito cuando me van otorgar esta atención humanitaria, para ello téngase en cuenta que esta atención



*humanitaria es para suplir mi mínimo vital de alimentación y alojamiento.3. Que se continúe dando cumplimiento con la atención humanitaria como lo ordena el auto 092, se realice visita para que se verifique el estado de vulnerabilidad para que este mínimo sea otorgado de manera inmediata. 4. Se corrija la atención humanitaria y se asigne este mínimo vital de acuerdo a mi núcleo familiar. 5. Se expida Certificación de víctima de desplazamiento forzado. 6. Se dé estricto cumplimiento a la sentencia T230-21 de la Honorable Corte Constitucional". Como datos de notificación señalo: "jhonospina815@gmail.com".*

Con la contestación de la demanda, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, allego contestación al derecho de petición con fecha 11/03/2022 dirigido al correo "[jhonospina815@gmail.com](mailto:jhonospina815@gmail.com)" del que se lee: "(...)En primer lugar, es necesario poner en su conocimiento que usted se encuentra incluida en el Registro único de Víctimas por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO / RADICADO FUD NJ000305635 / LEY 1448 DE 2011. Respecto de la solicitud de atención humanitaria por desplazamiento forzado realizado por Usted o un miembro de su hogar, nos permitimos informarle que de acuerdo con la nueva estrategia implementada por la Unidad para las Víctimas, la cual tiene como finalidad establecer las necesidades de las víctimas, identificando su situación real y actual con base en fuentes de información recientes donde haya tenido participación algún miembro del hogar, es posible determinar las carencias que presente el grupo familiar en alguno de los componentes de la subsistencia mínima, así como la gravedad y urgencia que requiere para su entrega. Mediante la RESOLUCIÓN No. 0600120213391850 de 2022 (debidamente notificada y en firme), por la cual se decide sobre la entrega de los componentes de la atención humanitaria, se evidenció que presenta CARENCIA LEVE EN EL COMPONENTE DE ALOJAMIENTO Y NO CARENCIA EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN. De acuerdo con lo antes descrito, se determinó la asignación de UN (1) giro, por valor de CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$430.000), para el período de un (1) año. El giro fue cobrado el 28/10/2021, es decir que a la fecha se encuentra vigente. Es preciso indicar que la atención humanitaria no tiene carácter retroactivo ni acumulativo, ni se puede ceder o endosar, porque no es un subsidio y su otorgamiento busca el acceso al mínimo vital mediante el abastecimiento de un mínimo de elementos materiales para subsistir exclusivamente destinados para víctimas de desplazamiento forzado. En lo relacionado con la prórroga de la atención Humanitaria, se aclara que conforme lo señalado por la H. Corte Constitucional, la ampliación de la atención humanitaria es excepcional y se aplica exclusivamente a hogares INCLUIDOS en el RUV, siempre que se encuentre en las circunstancias previstas en la Sentencia T-025 de 2004, C-278 de 2007 y T-496 de 2007 proferidas por la Honorable Corte Constitucional, es decir, en circunstancias de vulnerabilidad. Ahora bien, respecto al otorgamiento de la prórroga de la atención humanitaria, que la Sentencia C-278 de 2007 declaró inexecutable lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 387 de 1997, en relación a que la asistencia humanitaria sería prorrogable, en circunstancias excepcionales, por espacio límite de tres meses adicionales, es decir, que lo que fue declarado inexecutable por la Corte fue el límite temporal establecido en dicho artículo para la prórroga, lo cual no implica o conlleva a concluir que la atención humanitaria sea "indefinida, automática o permanente". Por lo que una vez pierda vigencia la medición, es necesario que eleve solicitud ante esta Unidad para las víctimas para iniciar una nueva medición de carencias".



Sobre derecho invocado como vulnerado, ha dicho la honorable Corte Constitucional, frente a la contestación de las peticiones que deben emitir las autoridades administrativas "... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: **1. oportunidad** **2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado** **3. ser puesta en conocimiento del peticionario...**" (subrayado y negrilla por el Despacho); es por lo anterior, que considera la Juzgadora que la contestación dada por la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS reúne las características señaladas por la Honorable Corte Constitucional, toda vez que se procedió por parte del accionado a dar contestación una por una a las solicitudes elevadas por el accionante indicándole que el accionante y su hogar ya fueron sujetos del proceso de identificación de carencias, mediante el cual se evidenció que presenta carencia leve en el componente de alojamiento y no carencia en el componente de alimentación, determinándose la asignación de un (1) giro, por valor de (\$430.000) mil pesos, para el período de un (1) año. El giro fue cobrado el 28/10/2021, **por lo que a la fecha se encuentra vigente, y una vez pierda vigencia la medición se deberá elevar solicitud para nueva medición de carencias**; además otorgo la certificación familiar sobre el estado en el Registro Único de Víctimas -RUV.

Por lo anterior y sin más consideraciones no se tutelarán los derechos fundamentales invocados por **JHON EDISSON OSPINA AGUDELO** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.523.306.

**EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

**RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR** el amparo deprecado por el ciudadano **JHON EDISSON OSPINA AGUDELO** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.523.306 contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, conforme a la parte motiva de esta decisión.

**SEGUNDO:** Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

**TERCERO:** Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

**CUARTO:** Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

**NOTIFÍQUESE,**

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS**  
**JUEZ**

Firmado Por:

Viviana Marcela Porras Porras  
Juez  
Juzgado De Circuito  
Familia 030  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,



Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **168fcbcf427105ca165ef0f41299942e75246bf9ed02b73dcccfa1ce103a613e**

Documento generado en 28/04/2022 03:13:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>